



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXICO**



JUICIO 485/2020

ACTOR

██████████ ██████████
██████████

DEMANDADO

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE
AMBAS DEL ESTADO DE
MÉXICO.

Toluca, Estado de México; a **veinte de noviembre del dos mil veinte.**

VISTAS para resolver las actuaciones del juicio administrativo número **485/2020**, promovido por ██████████, por su propio derecho, en contra de la **SECRETARIA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO**, y,

RESULTANDO

1. PRESENTACION DE DEMANDA

Con el escrito presentado el **veinticinco de octubre del dos mil diecinueve**, ante la Oficina de Correspondencia de la Primera y Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la cual por turno le correspondió conocer a la segunda de las mencionadas, donde el actor demandó de la autoridad señalada en el proemio de esta sentencia, la invalidez del siguiente acto:

“Formato Universal de Pago con fecha límite del treinta y uno de dos mil diecinueve, y línea de pago 506000 000014 711950 340292 217, por concepto de multa de verificación extemporánea por la cantidad de ██████████
██████████.

2. ADMISIÓN

Por acuerdo de fecha **veintiocho de octubre del dos mil diecinueve**, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, asimismo, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora en su ocurso inicial.

3. CONTESTACION DE DEMANDA.

Mediante acuerdos de fechas **ocho y veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve**, se tuvieron por contestada las demandas por parte de la **Secretaría de Finanzas y la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México**, remitiendo el expediente formado con motivo del acto impugnado, teniéndose por contestada las demandas en tiempo y forma y por admitidas las pruebas que ofrecieron.

4. AUDIENCIA DE LEY

El **cinco de febrero del dos mil veinte**, se llevó a cabo la audiencia de ley, con fundamento en los dispositivos 269 fracciones I y II, 270 y 271 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, donde se hizo constar la incomparecencia de las partes, acto seguido se procedió al desahogo de las pruebas que fueron admitidas, posteriormente se procedió a la etapa de alegatos, haciéndose constar que ninguna de las partes formula conclusiones; por último, se ordenó pasar los autos a dictar la sentencia que en derecho procediera.

5. TURNO A LA SALA ESPECIALIZADA

En fecha **seis de agosto de dos mil veinte** se presenta ante la Oficina de Correspondencia Común a la Primera y Séptima Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el oficio **TJA-7SR/3326/2020**, proveniente de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del cual remite a la Primera Sala Regional de este Tribunal el expediente identificado con número de juicio 1111/2019, en cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se determina la Especialización de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de los relacionados con la materia de Ecología y de Protección al Medio Ambiente, adicionalmente a los juicios administrativos de su competencia y acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

El **siete de agosto del dos mil veinte**, la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, admitió a trámite el expediente recibido asignándole como numero de juicio administrativo **485/2020** y se ordenó turnar los autos para resolver.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO



CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA DE LA SALA.

Esta Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente juicio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 87 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 41, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 1, 3 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 4, 22, 199, 229, 237, 269 y 273 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1.2 y 1.7 del Código Administrativo del Estado de México, 3, 4, 5, 35, 36 fracción I y 38 de la Ley Orgánica de este Tribunal así el sustantivo 40 de su Reglamento Interior.

De igual manera, se atiende al acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se determina la Especialización de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de los relacionados con la materia de Ecología y de Protección al Medio Ambiente, adicionalmente a los juicios administrativos de su competencia y acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se establecen los lineamientos para la remisión de los juicios administrativos en materia ambiental que se tramiten en la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Salas Regionales, así como los Recursos de Revisión tramitados en la Segunda y Tercera Sección de la Sala Superior, publicados en fecha veinte de marzo del dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de México.

El Licenciado Joel Alejandro Gutiérrez Toledano, se encuentra autorizado para conocer y resolver el juicio que nos ocupa, en términos del Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en fecha catorce de enero del año en curso, publicado en Gaceta de Gobierno del treinta y uno de enero del año en curso, con efectos a partir del cuatro de febrero del año dos mil veinte.

II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.

En términos de lo dispuesto en el artículo 273 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público e interés social; por lo que, su estudio es preferente, siendo que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, de manera coincidente señalaron que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 267 fracción XI y 268 fracción II en relación con el numeral 229, fracción I, todos del Ordenamiento Legal en consulta, es por lo que esta Sala Regional se pronuncia al respecto.

En efecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, establece que el acto que pretende impugnar el actor por esta vía, es el Formato Universal de Pago con línea de captura para pago en ventanilla 506000 000014 711950 340292 217, por un monto de [REDACTED] por concepto de verificación extemporánea el cual no puede ser considerado una resolución impugnada por esta vía.

Causal de improcedencia y sobreseimiento que a consideración de esta Sala Regional, se actualiza en el presente asunto, para una mejor comprensión del asunto se trae a contexto lo dispuesto en los artículos invocados:

Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:

I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;...”

Artículo 267.- El juicio ante el Tribunal es improcedente:

...
XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o legal.

Artículo 268.- Procede el sobreseimiento del juicio:

...
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;”

Del marco legal transcrito se obtiene, que el juicio contencioso administrativo es procedente en contra de las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO



En ese orden de ideas, el acto que pretende impugnar el actor por esta vía, se trata de un Formato Universal de Pago¹ que no puede ser considerado como una resolución impugnabile, puesto que sólo tiene como propósito promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los particulares y por ende, no representa el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa.

Esto es el formato universal de pago obtenido a través de medios electrónicos únicamente constituye un mero formato que hace saber al contribuyente la situación que guarda respecto a una determinada contribución que se encuentra obligado a cubrir, sin establecer sanción alguna para el caso de incumplimiento, es decir, no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente, y por ende, no le causa perjuicio, al no existir una obligación en caso de no atender a dicho formato.

Dan apoyo, por identidad de razón, los criterios emitidos por nuestro máximo Tribunal de Justicia en México, con los datos de identificación, rubro y texto siguientes:

Época: Novena Época, Registro: 166710, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.7o.A.644 A, Página: 1558

"CONSUMO DE AGUA. EL ESTADO INFORMATIVO DE CUENTA DE LA TOMA RESPECTIVA Y EL FORMATO UNIVERSAL DE PAGO DE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL OBTENIDOS VÍA INTERNET, RESPECTO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. Conforme al artículo 23, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, las Salas de ese órgano son competentes para conocer de los juicios contra resoluciones definitivas, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en dicha porción normativa, como lo es, que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Ahora bien, el estado informativo de cuenta de la toma de agua y el formato universal de pago de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal obtenidos vía internet, respecto de los derechos por su consumo, no constituyen resoluciones definitivas para efectos de su impugnación en el juicio contencioso administrativo ante el mencionado tribunal, ya que no representan la última voluntad de la autoridad administrativa, pues sólo son un historial obtenido de un medio electrónico, a

¹ Visible a foja 11 del expediente en que se actúa.

través del cual el contribuyente puede consultar sus adeudos bimestrales, aun cuando reflejen cantidades líquidas, pues éstas, por sí mismas, no son legalmente exigibles hasta que exista una resolución firme y debidamente notificada que determine un crédito fiscal a su cargo, sin que sea suficiente que se realicen operaciones aritméticas y se establezcan los periodos a pagar, ya que el acto debe contener los procedimientos conducentes que definan su situación legal o administrativa, por lo que los señalados documentos son meramente instrumentales para facilitar al particular el cumplimiento de su obligación tributaria. Por tanto, el juicio contencioso administrativo que se promueva en su contra es improcedente, en términos del artículo 23, fracción III, en relación con el 72, fracción XII, de la aludida ley, por lo que con apoyo en el artículo 73, fracción II, del citado ordenamiento, debe sobreseerse.”

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 230/2008. Jesús González Rodríguez. 27 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Martha Izalía Miranda Arbona.

Revisión contencioso administrativa 53/2009. Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. 27 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Christian Omar González Segovia”.

En ese entendido, si el Formato Universal de pago en ventanilla 506000 000014 711950 340292 217, por un monto de [REDACTED] por concepto de verificación extemporánea, con fecha límite de pago el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por concepto de multa por verificación extemporánea, no es considerado resolución definitiva, entonces resulta improcedente el juicio administrativo que se promueva en su contra, en términos de los artículos 267 fracción XI y 268, fracción II, en relación con el 229, fracción I de la Codificación procesal de la Materia.

Aunado a lo anterior, si la parte actora pretende impugnar la multa contenida en el formato universal de pago en estudio se debe indicar que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde con el principio preventivo, el Programa de verificación vehicular obligatoria que se emite cada semestre, desarrolla los fundamentos de una política de protección al ambiente, a partir de los compromisos adoptados por el Estado Mexicano en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tendentes a la implementación de medidas para la reducción de las emisiones antropogénicas (como son los contaminantes emitidos por los automóviles) que alteran la capa de ozono, y a la eliminación de vehículos poco amigables con el ambiente, dado el aumento del parque vehicular.

Por lo tanto, se debe indicar que el cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuyo monto puede o no coincidir con el contenido de la propuesta de declaración que al efecto emita la autoridad hacendaria, pues siempre existe la posibilidad de que se



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXICO



pague una cantidad mayor o menor a ese monto, o bien, que en los casos en que no se cuente con dicha propuesta se auto determine el monto del impuesto a pagar, supuestos en los cuales se evidencia que la autoridad no ha manifestado su última voluntad en relación con el cumplimiento de esas obligaciones tributarias.

Además dan apoyo, por analogía, los criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro máximo Tribunal de Justicia en México, con los datos de identificación, rubro y texto siguientes:

Época: Novena Época, Registro: 168248, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 182/2008, Página: 294

“TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que este órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que, entre otras cuestiones, determinen la existencia de una obligación fiscal; fijen en cantidad líquida o den las bases para una liquidación; nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, con el rubro:

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.”, sostuvo que el concepto “resoluciones definitivas” a que hace referencia el mencionado artículo 11 abarca no sólo aquellas resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo éste sea optativo, sino también las que reflejen el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En tal virtud, si el artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos sólo establece que los contribuyentes del impuesto comprobarán su pago con la copia de la forma mediante la cual lo efectuaron, se pone de manifiesto que el recibo de pago del impuesto sobre

tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular no constituye una resolución definitiva impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sino simplemente es el cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuyo monto puede o no coincidir con el contenido de la propuesta de declaración que al efecto emita la autoridad hacendaria, pues siempre existe la posibilidad de que se pague una cantidad mayor o menor a ese monto, o bien, que en los casos en que no se cuente con dicha propuesta se autodetermine el monto del impuesto a pagar, supuestos en los cuales se evidencia que la autoridad no ha manifestado su última voluntad en relación con el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, por lo que cuando el juicio contencioso administrativo se promueva contra el recibo de pago que contiene esas contribuciones resulta improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción II del artículo 202, en relación con la fracción II del diverso numeral 203, ambos del Código Fiscal de la Federación.”

Contradicción de tesis 169/2004-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito. 26 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Tesis de jurisprudencia 193/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de diciembre de dos mil cuatro”.

En ese orden de ideas, lo procedente es **DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO** del juicio con fundamento en lo establecido en los artículos 267 fracción XI y 268 fracción II en relación al diverso numeral 229 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Por lo tanto, toda vez que el sobreseimiento constituye una decisión que pone fin al juicio por circunstancias o hechos ajenos al fondo de la controversia planteada, esta Sala Regional se encuentra impedido para analizar los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora en contra del acto impugnado, según lo establecido en la Jurisprudencia número 68 de éste Órgano Jurisdiccional².

En mérito de lo expuesto y fundado; se:

² “SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPIDE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- El numeral 78 de la Ley de Justicia Administrativa ordena que procede el sobreseimiento del juicio, cuando: el demandante se desista del mismo; durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia; el demandante muera durante el juicio, si el acto impugnado sólo afecta a su persona; la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor, y en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución definitiva. Como se observa, el sobreseimiento es una resolución que pone fin al juicio contencioso administrativo por circunstancias o hechos ajenos al fondo de la controversia planteada, lo que desde luego imposibilita el análisis de las causales de invalidez del acto objetado.”



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXICO



RESUELVE:

PRIMERO. Se **DECRETA EL SOBRESEIMIENTO** del presente juicio administrativo con base a las consideraciones vertidas en esta sentencia.

SEGUNDO. **Notifíquese** personalmente al actor y por oficio a las autoridades demandadas.

Así lo resolvió y firma el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Primera Sala Regional de este Organismo Jurisdiccional, designado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en fecha catorce de enero del año en curso, entrando en funciones el cuatro de febrero del año que transcurre, ante el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ENCARGADO DEL DESPACHO

**MTRO. JOEL ALEJANDRO
GUTIÉRREZ TOLEDANO**

SECRETARIA

**LIC. CHRISTIAN GUZMÁN
HERNÁNDEZ**

La que suscribe, Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 57 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, **CERTIFICA** que el texto y firmas contenidas en la presente hoja, forman parte integrante de la sentencia dictada en fecha **veinte de noviembre del dos mil veinte**, dentro del expediente del juicio administrativo número **485/2020**.

OGM

ELIMINADO. Fundamento legal: Artículos 3 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Así como lo dispuesto en los artículos 2 fracción I, VII, VIII y XII, 6 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a una persona identificada o identificable.

